de abril de 1963 y 27 de junio de 1964, que concedieron a favor de don Feliu Estapé Cariteu, don Claudio Broch Crusellas y don Jacinto Berenguer Comas el modelo industrial número 32.786, series «A» y «J», inclusive, por figuras decorativas, y declaramos de modo expreso que el acto administrativo recurrido es conforme a derecho y, como tal, válido y subsistente; sin especial imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 18 de octubre de 1966.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

RESOLUCION del Distrito Minero de Guipúzcoa por la que se hace pública la caducidad de la concesión de explotación minera que se indican.

Con fecha 6 de julio de 1966 el excelentísimo señor Ministro de este Departamento ha dictado la siguiente Orden:

«Vista la propuesta de caducidad de la concesión de explotación minera denominada «Salvador», número 4.424, de mineral de caolín, de la provincia de Guipúzcoa, y vista la Ley de Minas de 19 de julio de 1944 y el Reglamento General para el Régimen de la Minería de 9 de agosto de 1946;

Resultando que la Jefatura del Distrito Minero informa que en la mencionada concesión no han sido ejecutados en tiempo y forma los trabajos de explotación impuestos en el otorgamiento;

Resultando que por la Jefatura del Distrito Minero le fué impuesta al concesionario una multa de 5.000 pesetas, de acuerdo con el artículo 100 del Reglamento, que no hizo efectiva;

Resultando que esta Dirección General, estimando la procedencia de la propuesta, ordenó se notificase al interesado, en cumplimiento del artículo 177 del Reglamento, a fin de que en el plazo de quince días pudiera hacer las alegaciones que estimase convenientes para la defensa de sus derechos y, cumplida la orden, el interesado no ha presentado alegaciones.

Vistos los artículos 100, 171, 177 y 205 del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 9 de agosto de 1946;

Considerando que transcurridos los plazos legales sin que por el interesado hayan sido ejecutados en tiempo y forma los trabajos de explotación, que no ha hecho efectiva la multa que le impuso la Jefatura del Distrito Minero y no habiendo presentado alegaciones al serle notificada la propuesta de caducidad,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Minas y Combustibles, de acuerdo con el Consejo de Minería, ha resuelto declarar la caducidad de la concesión de explotación citada, publicándose la resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y en en de la provincia, y se hará por la Jefatura de Minas la oportuna notificación al interesado, quien podrá entablar recurso contencioso-administrativo, cumpliendo los requisitos que regulan su jurisdicción y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del vigente Reglamento.»

Lo que se hace público por desconocerse el domicilio y paradero del interesado, quien podrá entablar recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 19 de octubre de 1966 por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias del término municipal Carratraca, provincia de Málaga.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Carratraca, provincia de Málaga, en el que no se ha formulado reclamación alguna durante su exposición al público, siendo fa-

vorables cuantos informes se emitieron sobre ella y cumplidos todos los requisitos legales de tramitación;

Vistos los artículos 1.º al 3.º, 5.º al 12 y 23 del Reglamento de Vías Pecuarias de 23 de diciembre de 1944, y los pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Dirección General de Ganadería e informe de la Asesoría Jurídica del Departamento, ha resuelto:

Primero.—Aprobar la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Carratraca, provincia de Málaga, por la que se consideran:

Vía pecuaria necesaria: Cañada Real de Sevilla a Málaga. Anchura: 75,22 metros.

El recorrido, dirección, superficie y demás características de las expresadas vías pecuarias figura en el proyecto de clasificación redactado por el Perito Agrícola del Estado don Enrique Gallego Fresno, cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto les afecta.

En aquellos tramos de vías pecuarias afectados por situaciones topográficas, alteraciones por el transcurso del tiempo en cauces fluviales o marítimos, paso por zonas urbanas o situaciones de derecho, previstas en el artículo segundo del Reglamento de Vías Pecuarias, la anchura de tales tramos será definitivamente fijada al practicarse su deslinde.

Segundo.—Firme la presente clasificación, se procederá al deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias.

Tercero.—Esta resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y de la provincia, para general conocimiento agota la vía gubernativa, pudiendo los que se consideren afectados por ella interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en la forma, requisitos y plazos señalados en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en armonía con el artículo 52 y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 19 de octubre de 1966.—P. D., F. Hernández Gil.

Ilmo. Sr. Director general de Ganadería.

ORDEN de 25 de octubre de 1966 por la que se declara a la instalación de secadero de granos de don Antonio Dorado Capilla comprendida en Zona de Preferente Localización Industrial Agraria.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa Dirección General sobre petición formulada por don Antonio Dorado Capilla para instalar un secadero de granos en Don Benito (Badajoz), acogiendo a los beneficios previstos en el Decreto 2855/1964, de 11 de septiembre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre Industrias de Interés Preferente, y demás disposiciones dictadas para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno.—Declarar la instalación de secado de granos de don Antonio Dorado Capilla, comprendida en Zona de Preferente Localización Industrial Agraria, por cumplir las condiciones exigidas en el Decreto 2855/1964, de 11 de septiembre.

Dos.—Conceder los beneficios previstos para el grupo A de la Orden de este Ministerio de 5 de marzo de 1965, a excepción de la servidumbre de paso, por no haberse justificado su necesidad, y la expropiación, por no solicitarse.

Tres.—Estimar acogida a los anteriores beneficios la totalidad de la industria a instalar.

Cuatro.—Otogar un plazo de seis meses, contado a partir de la aceptación de la presente resolución, para la presentación del proyecto definitivo y para la justificación de disponer del tercio del capital real de la inversión.

Cinco.—Conceder un plazo de tres meses para la iniciación de las obras y de dieciocho meses para su finalización, contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto definitivo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 25 de octubre de 1966.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Economía de la Producción Agraria.

IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

BARCELONA

En virtud de lo dispuesto por el señor Juez de Primera Instancia número 17 de esta ciudad, en providencia de hoy, dictada en los autos de procedimiento sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos por el Procurador don Narciso Ranera Cahis, en nombre y representación de «Caja de Crédito, Sociedad Cooperativa», contra doña María Sigüán Almenara y don Manuel Mayoral Pedrés, por el presente se sacan a pública subasta por primera vez, por término de veinte días y por el precio, respectivamente, fijado al efecto en la escritura base del procedimiento que se dirá, las siguientes fincas hipotecadas en aquella escritura:

Primera.—La tercera parte pro indiviso de pieza de tierra bosque pinar, sita en el paraje denominado «Torre Gallina», del término de Vidreras, de superficie tres hectáreas veinte áreas, lindante: Sur, Oeste y Norte, con resto de la finca matriz, y Este, en línea recta de cien metros, Richard Bauer. Inscripción segunda de la finca número 1.099, folio 179, libro 51, de Vidreras, tomo 1.018 del Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Farnés.

Valorada en cuatrocientas mil pesetas.

Segunda.—La tercera parte pro indiviso de una pieza de tierra de pertenencias de la anterior, de igual situación y cabida aproximada ocho hectáreas una área cincuenta centiáreas de tierras como la anterior, lindante: Norte, Miguel Pagés; Este, la carretera de Vidreras y José Raig; Sur, José Llorenas y Oeste, Joaquín Durall y Miguel Pagés. Está formada por la parcela 1 del polígono 1.548 del 16 del Catastro. Inscripción segunda de la finca 1.100, folio 182, libro 51, tomo 1.018 de Vidreras, del Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Farnés.

Valorada en setecientos cincuenta mil pesetas.

Tercera.—Una tercera parte pro indiviso de una rústica sita en el paraje «Torre Gallina», del término de Vidreras, de cabida aproximada siete hectáreas ocho áreas ochenta y siete centiáreas entre campo, secano de segunda y tercera calidad, erial, monte bajo y pinar, lindante: Norte, Gabriel Bonet; Este, José Raig, Richard Bauer. Vicente Flass, Manuel Mayoral y María Sigüán; Sur, la finca de igual procedencia y la carretera de Vidreras, y Oeste, dicha carretera. Es parte de la parcela 47 del polígono 14 del Catastro. Inscripción octava de la finca número 266, folio 31, libro 36, tomo 632 de Vidreras, del Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Farnés.

Valorada en setecientos cincuenta mil pesetas.

Se ha señalado para el remate, que tendrá lugar en la Sala Audiencia de dicho Juzgado de Primera Instancia número 17 de Barcelona, sito en la planta baja del Palacio de Justicia, ala derecha, primer patio, el día quince de diciembre próximo, y hora de las doce, previéndose a los licitadores que no se admitirán posturas que no excedan de los respectivos tipos de subasta; que para tomar parte en la misma deberán aquéllos consignar previamente en la mesa del Juzgado o en

la Caja General de Depósitos una cantidad igual por lo menos al diez por ciento de dichos tipos de subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, salvo el derecho de la Entidad actora de concurrir a la subasta sin hacer depósito; que las respectivas consignaciones se devolverán a sus dueños después del remate, excepto la correspondiente al mejor postor, que quedará en garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de la venta; que los autos y la certificación del Registro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría del infrascrito; que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación; que las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la Sociedad actora continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate, y que los gastos de subasta y posteriores serán a cargo del rematante con inclusión del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y pago de laudemios, si los hubiere.

Barcelona, veinticinco de octubre de mil novecientos sesenta y seis.—El Secretario, Aurelio Velasco.—6.761-C.

MADRID

Don Juan de Dios Jiménez Molina, Magistrado Juez de Primera Instancia número diecisiete de los de Madrid.

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo penden autos de secuestro instados por el Procurador don Santos de Gandarillas Carmona, en nombre del Banco Hipotecario de España, contra Inmobiliaria Cudomar, S. A., en los cuales, en proveído de este día, se acuerda sacar a primera y pública subasta, por término de quince días, la finca hipotecada que se describe así:

En Madrid, carretera de Fuencarral, y Playa de Madrid, número nueve, de la ciudad del Pino: Piso vivienda, segundo derecha, subiendo por la escalera de la casa, con una superficie de setenta y nueve metros cuarenta y dos decímetros cuadrados, lindante: por su frente, con la escalera de la finca; por su izquierda, con la calle de Juan Bravo; por su derecha, con el jardín del bloque, y por el fondo, con el piso segundo izquierda de la casa número ocho Consta de cocina, comedor, tres dormitorios y cuarto de baño; su cuota en los elementos comunes del inmueble es de dieciséis centésimas y sesenta y seis diezmilésimas por ciento del valor total de la misma. Inscrita la distribución de hipoteca a favor del Banco en el Registro de la Propiedad número 7 de Madrid, al tomo 240, folio 119, libro 85 de Fuencarral, finca 7.145, inscripción segunda. Esta finca quedó respondiendo de pesetas 30.000 de capital, intereses correspondientes y del 20 por 100 de dicho capital, o sea la cantidad de 6.000 pesetas para costas y gastos.

Se toma como tipo de la subasta la cantidad fijada en la escritura de hipoteca, o sea de sesenta mil pesetas; no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes de dicho tipo, y para tomar parte en la subasta deberán consignar los licitadores el diez por ciento del tipo de

la subasta, cuya diligencia se celebrará en la Sala Audiencia de este Juzgado el día cinco de diciembre próximo y hora de las doce de su mañana, el cual se halla sito en la calle del General Castaños, número 1.

La consignación del precio se verificará a los ocho días siguientes al de la aprobación del remate.

Se hace constar que los títulos, suplidos por certificación del Registro de la Propiedad, se hallan de manifiesto en la Secretaría, y que los licitadores deberán conformarse con ellos, no teniendo derecho a exigir otros. Que las cargas o gravámenes anteriores y preferentes al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Dado en Madrid a diecinueve de octubre de mil novecientos sesenta y seis.—El Juez, Juan de Dios Giménez Molina.—El Secretario (ilegible).—2.987-1.

SANTA MARIA DE GUIA DE GRAN CANARIA

Don José Malpartida Morano, Juez de Primera Instancia de Santa María de Guía de Gran Canaria y su partido.

Por el presente se hace saber: Que a instancia de don Francisco González Marrero se tramita en este Juzgado expediente de declaración de fallecimiento de su padre, don Pedro González Herrera, hijo de Manuel y Nicolasa, nacido el día uno de agosto de mil ochocientos setenta y cinco en Valleseco, isla de Las Palmas de Gran Canaria, el cual marchó para América desde el año 1924, no teniéndose noticias del mismo desde hace más de veinte años, presumiéndose su muerte.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Santa María de Guía de Gran Canaria a trece de septiembre de mil novecientos sesenta y seis.—El Juez, José Malpartida Morano.—El Secretario, Guillermo Pérez-Herrero.—6.759-C.

1.ª 2-11-1966

ZARAGOZA

Don Miguel Español La Plana, Magistrado, Juez de Primera Instancia del Juzgado número tres de los de Zaragoza.

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado y al número 269 de 1966 se tramita expediente de jurisdicción voluntaria para la declaración de fallecimiento de don Angel Benedicto Saura, a instancia de doña Isabel Casamayor Pérez, representada por el Procurador don Marcial José Bibián, y la que disfruta de los beneficios legales de pobreza, el cual se ausentó de esta ciudad de Zaragoza, donde residía, con ignorado paradero desde el mes de julio de 1936.

Y conforme a lo determinado en el artículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se expide el presente, que será anunciado con intervalo de quince días, en Zaragoza a veintidós de septiembre de mil novecientos sesenta y seis.—El Secretario (ilegible).—4.672-E. y 2.ª 2-11-1966